

JIMÉNEZ, Óscar Jaime, *Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996*, Valencia, Tirant lo Blanch - Universidad de Burgos, 2002, 343 pp.

WOODWORTH, Paddy, *Guerra sucia, manos limpias. ETA, el GAL y la democracia española*, Barcelona, Crítica, 2002, 527 pp.

No cabe duda de que la cuestión nacional y, en el caso vasco, la violencia política a ella asociada con el terrorismo de ETA, pero también con la respuesta del Estado a través de los GAL y la “guerra sucia”, han constituido el principal obstáculo para la normalización democrática de España en los casi treinta años que dura ya un proceso por lo demás considerado modélico y pacífico. Los dos libros aquí reseñados suponen una aportación fundamental al conocimiento de este aspecto decisivo de la democracia española desde dos perspectivas diferentes e igual de valiosas, la politológica y la periodística, alejadas de cualquier tentación de “pacto de silencio” siempre presente en un tema como el que nos ocupa.

Resultado de su tesis doctoral, el estudio de Óscar J. Jiménez se centra en cuatro ámbitos del Estado y en su respuesta al problema terrorista: la estructura de seguridad interior, el consenso político, la legislación antiterrorista y la cooperación internacional. Cada uno de ellos introducidos por una reflexión analítica, que nos recuerda las dificultades de la lucha contra la violencia política en los regímenes democráticos, a diferencia de los autoritarios (por más que el franquismo se mostrara poco eficaz combatiendo el terrorismo que él mismo había provocado). Dificultades acrecentadas además en democracias poco asentadas como la española, o inestables como la italiana, por la permanencia de una cultura policial autoritaria y el riesgo de “desviación” de aparatos de un Estado que, como ha escrito Donatella della Porta (*Terrorismi in Italia*, Bolonia, Il Mulino, 1984), no puede ser considerado como un todo monolítico enfrentado a la subversión. El autor concede gran

importancia a esa “variable policial” en su dimensión organizativa e individual: «los Ministerios del Interior, en los regímenes democráticos, se erigen en un poder autónomo en gran medida», con una típica desconfianza hacia el poder político y una amplia capacidad para influir sobre él, que aumenta con la amenaza terrorista (p. 68).

Tampoco se olvida mencionar la actitud de las distintas culturas políticas hacia la violencia, en particular de la izquierda marxista, de cuyo seno habían surgido durante los años sesenta la mayor parte de los grupos que acabarían optando por la lucha armada en la década siguiente, y víctima de la doctrina del “orden público” durante el franquismo e incluso los primeros años de la transición. De ahí que esa izquierda mantuviera durante años una actitud ambigua respecto al terrorismo, pues tampoco olvidaba que el “desorden” público había sido quizás el factor decisivo en la crisis de la República, o al menos el más utilizado como justificación por los militares golpistas y la derecha reaccionaria. Es cierto que no constituye el centro de su análisis, pero el autor se muestra aquí demasiado aproximativo y dependiente de fuentes secundarias al poner en el mismo saco al PCE, PNV y HB (pp. 52-53), pues el PCE condenó oficialmente el terrorismo muy pronto, antes de la muerte de Franco, y el PNV lo hizo al menos desde 1978, como demuestra el diario de sesiones del Congreso, y no por primera vez en 1980 como se afirma (p. 185). Tampoco se aclara muy bien en qué consistió la evolución del PSOE desde una concepción blanda a otra dura del orden público.

Tal superabundancia de aparato teórico y de fuentes secundarias, normal en una tesis doctoral, y cierto déficit de fuentes primarias –las entrevistas parecen

haber rendido pocos frutos, sólo como soporte de la información— determinan un desequilibrio, incluso lingüístico, entre las partes analíticas y descriptivas, entre las generales y las referidas al caso español, por otra parte bastante habitual en nuestras obras académicas. Se integran con acierto en los dos últimos capítulos, los dedicados a la legislación antiterrorista y la cooperación internacional, no tanto en los dos primeros que abordan la cuestión básica de las respuestas ilegales por parte del Estado español, designadas como «terrorismo vigilante» (p. 16), lo que obliga al autor a recurrir a un uso desmedido de las notas.

Eso, junto a una estructura circular y repetitiva en exceso, atenúa algunas importantes afirmaciones desperdigadas por el texto, no siempre recogidas en las conclusiones. Así la continuidad de la política antiterrorista entre la dictadura, los gobiernos de UCD y del PSOE, incluso con la permanencia de numerosos funcionarios implicados en la represión franquista (p. 101); que el PSOE adoptó con Barrionuevo una estrategia fundamentalmente represiva, hasta el punto de que las negociaciones con ETA iniciadas por UCD se pusieron al servicio de objetivos de información polioial (p. 207); que el PSOE no logró repetir con ETA militar (m) y HB el éxito conseguido por UCD con ETA político-militar (PM) y Euskadiko Eskerra, de ahí que se pasara a reinserciones individuales con mayor contenido policial que político, lo que suponía reconocer la imposibilidad de acabar con la organización terrorista (pp. 211-212); la ineficacia de las legislaciones especiales antiterroristas, cuyo único fin sería según muchos autores el de «satisfacer las expectativas de la opinión pública» (p. 224); la tendencia a usar esa legislación de manera abusiva, propiciando los comportamientos ilegales o «informales», que no es sino «una clara muestra del fracaso, al menos parcial, del modelo antiterrorista diseñado por las autoridades» (p. 227) según el modelo alemán e italiano, sin complementarse con otro tipo de medidas dirigidas a «desincentivar» la incorporación de nuevos militantes a esos grupos o atraerse

el apoyo de la opinión pública vasca (pp. 260-261). En definitiva, que el terrorismo «hunde sus raíces profundamente en el régimen franquista» (p. 58), que sólo es posible acabar con él mediante el consenso político y que el mantenimiento de las acciones policiales en la estricta legalidad es lo único que puede a largo plazo evitar «un posible enquistamiento de los grupos terroristas en las sociedades democráticas» (pp. 40-41).

Donde más insuficiente se muestra el estudio de Óscar J. Jiménez es precisamente donde se demuestra más eficaz el libro de Paddy Woodworth, corresponsal de prensa durante varios años en España, un ejemplo del nivel superior del periodismo cuando suma honestidad a la calidad y sabe hacer uso de sus enormes recursos lingüísticos, metodológicos e interpretativos. La descripción concisa de personajes (como el inspector Amedo) y vivida de las escenas (la carga policial en el entierro de los restos de Lasa y Zabala, el ingreso de Vera y Barrionuevo en prisión), el cuidado en contextualizar la información (las agresiones a la *Ertzaintza* en las semanas previas a dicho entierro), la habilidad en las entrevistas (como la de Rafael Vera), la atención a los detalles y a las diversas perspectivas (sin olvidar nunca a las víctimas), son méritos de este reportaje periodístico que acaba convirtiéndose en una gran novela negra. Por ella desfilan los policías Amedo y Domínguez, los mercenarios franceses del GAL, los funcionarios y políticos socialistas Sancristóbal, Damborenea, Vera, Roldán o Barrionuevo, el ex agente secreto Perote, el banquero Conde, el periodista Pedro J. Ramírez, los ex presidentes Suárez y González, el juez Garzón, los «papeles del CSID», la intervención de Banesto o la guerra de la televisión digital. No es de extrañar el éxito que el libro ha obtenido en su primera edición inglesa, del 2001. La parte más débil es la introducción al tema vasco, que cumple objetivos más periodísticos que historiográficos (con algunos errores, como las supuestas elecciones de 1934).

Por todo el relato despunta la

importante función de la prensa, tanto en su labor más positiva, de denuncia y control de las instituciones públicas, como en sus aspectos más oscuros en la defensa de algunos intereses específicos en juego: son aleccionadores al respecto los ejemplos de *Diario 16*, *El País* y, sobre todo, *El Mundo*. Considerando hasta dónde llegaron la conjura y el chantaje demostrados, otro mérito de Woodworth ha sido no caer en la fácil tentación periodística o pseudohistórica de la “teoría conspirativa”, y afirmar que en la sucesión de acontecimientos intervino también la teoría del caos: «se habían lanzado demasiadas piedras al aire y era de temer que algunas de ellas cayeran, con resultados impredecibles» (p. 295).

El autor toma una posición razonada y ética ante lo sucedido. Confirma la continuidad de la “guerra sucia”, pero señala las diferencias entre la violencia antes de 1982 –de extrema derecha, cuyos objetivos eran nacionalistas vascos, demócratas y antifranquistas– y la que vino después, con mercenarios reclutados para asesinar a miembros de ETA y, por error o quizás para influir en la opinión pública francesa, a personas inocentes (p. 180). No deja de recordar el obstruccionismo del gobierno, pese a las declaraciones oficiales (p. 222), ni las acusaciones del PSOE contra la magistratura y el doble lenguaje de Felipe González, entre la negación y la justificación, incluso ante la condena de algunos de sus subordinados (pp. 253-256) o tras la muerte de Miguel Ángel Blanco (p. 234). Ni la política

esencialmente represiva llevada a cabo por los sucesivos gobiernos socialistas en el País Vasco, esa «guerra del norte» que permitía a oficiales como Galindo una carrera tentadora, con el cuartel de Intxaurre como una avanzada de la Legión en territorio enemigo (p. 188). Al mismo tiempo hace un análisis equilibrado de la sentencia del Tribunal Supremo condenando a Barrionuevo y Vera, así como de los votos particulares contrarios (pp. 367 y ss.).

Se muestra contundente en el juicio sobre la vileza moral y el gran error político de los GAL, que si en los años ochenta «enseñó a muchos jóvenes de la primera generación posfranquista del País Vasco a odiar a las fuerzas de seguridad españolas», en los noventa «inició a otra generación en ese mismo odio» (p. 274) y por eso «siguió fracasando mucho después de que los escuadrones de la muerte hubieran sido disueltos» (p. 258). Para los partidarios de ETA confirmaba su teorema, equiparando las “dos violencias” y presentando la democracia española como una simple fachada tras la que se escondía un Estado fascista y colonizador. Como ha escrito Patxo Unzueta, el GAL fue «decisivo para la reproducción generacional de la violencia [...] Esa es la paradoja del terrorismo. Por sí mismo es impotente para vencer al Estado democrático. Pero una respuesta equivocada por parte de ese mismo Estado puede desestabilizar gravemente el sistema» (p. 402).

Javier Muñoz Soro